



Consejo de Seguridad

Distr. general
23 de abril de 2004
Español
Original: inglés

Carta de fecha 20 de abril de 2004 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo

Le escribo en relación con mi carta de fecha 28 de enero de 2004 (S/2004/95). El Comité contra el Terrorismo ha recibido el cuarto informe presentado por Argelia con arreglo al párrafo 6 de la resolución 1373 (2001), que se adjunta a la presente (véase el anexo). Le agradecería que hiciera distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Inocencio F. **Arias**

Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo

Anexo

**Carta de fecha 19 de abril de 2004 dirigida al Presidente del
Comité contra el Terrorismo por el Representante de Argelia
ante las Naciones Unidas**

[Original: francés]

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno y en relación con su carta de fecha 16 de enero de 2004, tengo el honor de adjuntar a la presente un informe complementario en que figura la respuesta a las observaciones y preguntas formuladas por el Comité contra el Terrorismo con respecto al tercer informe de Argelia, presentado el 10 de julio de 2003 en cumplimiento del párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el documento adjunto).

El Gobierno de Argelia está dispuesto a proporcionar al Comité la información adicional que considere necesaria o solicite.

(Firmado) Abdallah **Baali**
Embajador
Representante Permanente

Documento adjunto**República Argentina Democrática y Popular****Respuestas a las preguntas formuladas por el Comité contra el Terrorismo**

Abril de 2004

Índice

	<i>Página</i>
Introducción	4
1. Medidas de ejecución: eficacia de la protección del sistema financiero	4
– Mecanismo de represión del terrorismo	14
– Controles de aduanas, fronteras e inmigración	16
– Controles para impedir el acceso de los terroristas al suministro de armas	17
2. Asistencia y consejos	18
Conclusión	19

Introducción

El Gobierno de Argelia, tras la presentación de su tercer informe sobre la aplicación de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, ha continuado el proceso que apunta a completar el marco legislativo para la lucha contra el terrorismo. Un grupo de trabajo establecido por el Jefe de Gobierno ha preparado un proyecto de ley sobre el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo que, tras su examen por el Gobierno, será presentado al Parlamento para su aprobación.

El proyecto de ley relativo a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo prevé un conjunto de mecanismos y medidas con miras a detectar, prevenir y combatir estas nuevas formas de delincuencia. El proyecto enuncia entre otras cosas la obligación de denunciar las operaciones dudosas o sospechosas a la Dirección de Información Financiera. Se establecen sanciones penales contra quienes sean declarados culpables de negligencia, de no haber presentado una denuncia o la declaración o de complicidad en casos de desviación de fondos a fines terroristas o de blanqueo de dinero.

El artículo 5 del proyecto de ley plantea el postulado básico según el cual toda transacción financiera constituye una operación bancaria. El texto del artículo es el siguiente: "Las transferencias hacia o desde el extranjero de fondos, títulos o valores deberán ser efectuadas por un banco o una institución financiera".

Las transacciones de un monto fijado por reglamento que no se efectúen por conducto de entidades bancarias y financieras son asimiladas a una operación ilícita de fuga o blanqueo de dinero. Las personas naturales o jurídicas que hayan facilitado deliberadamente o no una operación de esa índole serán penalmente responsables de sus actos.

Al aprobarse próximamente el proyecto de ley sobre el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo e incorporarse en el código penal nuevas disposiciones para reprimir el blanqueo de dinero, Argelia habrá completado su dispositivo jurídico para todas las cuestiones relacionadas con las actividades terroristas y la gran delincuencia organizada.

Se introducirán enmiendas y modificaciones en las leyes y los reglamentos a medida que se generalice la práctica en materia de control, investigación y coordinación entre las estructuras correspondientes.

1. Medidas de ejecución: eficacia de la protección del sistema financiero

1.1 La Dirección de Información Financiera, establecida por decreto No. 02-127, de 7 de abril de 2002, está en curso de organización con miras a comenzar sus actividades. El Presidente y los otros cinco miembros, designados por decreto presidencial de fecha 10 de febrero de 2004 por un período de cuatro años, han asumido su cargo y preparado el programa de trabajo y el reglamento. La Dirección, que forma parte del Ministerio de Hacienda, constituye una estructura independiente con personalidad jurídica propia y autonomía financiera.

1.2 El decreto 02-127, de 7 de abril de 2002, por el cual se estableció la Dirección, prevé que los bancos hagan una declaración en caso de movimientos de fondos sospechosos. La declaración tiene carácter jurídico y surte efectos jurídicos,

especialmente en el campo penal, si hay indicios que corroboren los hechos enunciados.

Las disposiciones relativas al blanqueo de dinero constituirán la base legal en cuanto a la obligación de declarar los movimientos de fondos sospechosos. El artículo 19 del proyecto de texto califica de sospechosa toda transacción inusitada o injustificadamente compleja o que no parezca tener justificación económica u objeto lícito. Se encuentra la misma definición en el artículo 108 de la Ley de Hacienda de 2003.

Los criterios que permiten determinar el carácter sospechoso de una transacción son múltiples y los bancos argelinos trabajan con diversas variantes:

- Operaciones sin precedentes en la cuenta;
- Operaciones de monto anormalmente elevado;
- Operaciones que no entren en el giro de actividad del titular de la cuenta;
- Operaciones ocasionales;
- Transferencias de un monto elevado.

La obligación de denunciar una transacción sospechosa está impuesta por la ley. En el decreto 02-127 y en los artículos 19 a 21 del proyecto de ley sobre el blanqueo de dinero, se señala expresamente que “Los bancos están obligados a comunicar a la Dirección cualquier situación que dé lugar a sospechas con el objetivo de controlar los movimientos de fondos sospechosos, propiciar una mayor visibilidad y poder proceder al seguimiento de las operaciones que generen corrientes financieras, así como de adoptar medidas para hacer posible identificar a personas o entidades que realicen prácticas dudosas o sospechosas y, por último, atribuir la responsabilidad a distintos niveles en los casos en que se confirmen las sospechas”. La obligación de denunciar las operaciones sospechosas se extiende, por lo demás, a las transacciones que resulten ser de índole delictual o criminal.

En caso de incumplimiento de esta obligación, en la Ley de Hacienda de 2003 se dan a la Dirección atribuciones legales para intervenir en todas las circunstancias en que no se puedan hacer valer el secreto bancario ni el profesional. El artículo 33 del proyecto de texto sobre el blanqueo de dinero y la represión de la financiación del terrorismo establece una multa de 50.000 a 5 millones de dinares sin perjuicio de la aplicación de otras penas disciplinarias y administrativas.

1.3 La Dirección ha iniciado una campaña de información y toma de conciencia en los bancos, las instituciones financieras y todas las demás personas físicas o jurídicas que puedan intervenir en este campo a fin de explicar su cometido y definir las relaciones de trabajo y de cooperación en el futuro. Se ha invitado a esas instituciones a designar a quienes estarán facultados para actuar como intermediarios y colaborar con los miembros de la Dirección, que a su vez ha comenzado a entablar relaciones de trabajo y cooperación con estructuras homólogas de otros países.

La Dirección aplicará en los planos jurídico y procesal su propio instrumento constitutivo, pero tendrá también un dispositivo más amplio en razón de la entrada en vigor de la ley sobre el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

1.4 La obligación relativa a la identificación de quienes administran fondos a título fiduciario está enunciada en la Ley de Hacienda de 2003. Según el artículo 16 del

proyecto de ley, los bancos y las instituciones financieras están obligados a comunicar a las autoridades competentes y poner a su disposición toda información útil sobre la identidad de sus clientes, quedando entendido que levantan el secreto bancario y profesional para los organismos de control e investigación.

El artículo 108 de la Ley de Hacienda de 2003 impone a todos los organismos que funcionen en el país y estén autorizados para realizar operaciones de intermediación financiera o similares la obligación de:

- “Cerciorarse, mediante documentos probatorios oficiales, de la verdadera identidad de sus clientes habituales u ocasionales o de las personas por cuya cuenta actúen esos clientes cuando parezca que no lo hacen por cuenta propia”;
- “Cerciorarse por todos los medios legítimos del origen y el destino de los fondos y la finalidad de las operaciones que se asienten en sus libros”.

Este procedimiento se complementa con la práctica interna de los bancos y las instituciones financieras en el proceso de apertura de las cuentas. El solicitante debe identificarse mediante un documento de identidad y una declaración de residencia. En situaciones especiales, se recaban los servicios jurídicos de bancos e instituciones financieras para constatar los antecedentes del cliente.

El artículo 9 del proyecto de ley sobre el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo reconoce a los bancos, en caso de incertidumbre, el derecho de informarse por todos los medios legales de la identidad del verdadero mandante o de aquél para quien se actúa.

El artículo 14 del proyecto de ley impone por último a los bancos la obligación de conservar y mantener a disposición de las autoridades competentes los documentos relativos a la identidad del cliente durante un período de cinco años contados a partir de la fecha en que se cierre la cuenta o termine la relación comercial.

1.5 Al no haber casos constatados de operaciones de blanqueo y financiación del terrorismo por conducto de los sistemas bancario y financiero, no existen estadísticas acerca de las sanciones impuestas a las instituciones financieras argelinas o de derecho argelino por prestar apoyo a actividades terroristas. La inconvertibilidad parcial de la moneda argelina y el sistema de control de cambios vigente hacen difícil utilizar el sistema bancario y financiero de Argelia en beneficio de actividades u organizaciones terroristas en Argelia o en el extranjero.

La ordenanza 96-22 de julio de 1996, relativa a la represión de las infracciones de las leyes y reglamentos cambiarios y sobre movimientos de capitales ha regulado por completo la cuestión de la financiación del terrorismo y de actividades delictivas haciendo extensivo el delito de infracción o tentativa de infracción a la reglamentación cambiaria en caso de declaración falsa, incumplimiento de la obligación de declarar, incumplimiento de los procedimientos fijados y falta de la autorización necesaria. Para poder apreciar mejor la importancia asignada al cumplimiento de los procedimientos en materia de transferencia, baste señalar que en el artículo 1 de la ordenanza se enuncia el principio de que el infractor no puede hacer valer su buena fe.

Según el artículo 7 de la ordenanza, “Sin perjuicio de la responsabilidad penal de sus representantes legales, la persona jurídica de derecho privado será responsable de las infracciones cometidas por su cuenta por sus órganos o por sus representantes legales”.

La ordenanza 03-11, de 26 de agosto de 2003, relativa a la moneda y al crédito, además de instituir la obligación de una investigación previa, ha hecho más estrictas las condiciones para el establecimiento de bancos e instituciones financieras. El artículo 80 excluye por principio la posibilidad de establecer instituciones de esa índole, dirigir las, directamente o por interpósita persona, y administrar o representar a cualquier título un banco o institución financiera a las personas vinculadas al tráfico de drogas o declaradas culpables de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

El artículo 91 de esa ordenanza exige que, para establecer un banco o institución financiera, se justifiquen los fondos y su origen. El capital inicial para el establecimiento de instituciones financieras debe proceder de actividades legales y hay que identificar a los propietarios del capital y a los accionistas.

El artículo 104 de la misma ordenanza prohíbe la concesión de créditos de cualquiera índole por un banco o institución financiera a sus dirigentes y accionistas y sus familiares en primer grado. De esta manera se excluiría toda posibilidad de operación fraudulenta o efectuada sin transparencia.

Con arreglo al artículo 12 del proyecto de ley relativo al blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, la Comisión Bancaria del Banco de Argelia ejerce el control ordinario sobre los bancos e instituciones financieras para cerciorarse de la regularidad de las transacciones y examinar los casos de sospecha. Los artículos 19, 20 y 21 imponen a toda persona y a los organismos autorizados que realicen actividades de asesoramiento o que administren directa o indirectamente transacciones financieras la obligación de comunicar a la Dirección toda operación sospechosa.

La ley sobre blanqueo de dinero y financiación del terrorismo que está en vías de aprobación impone a las autoridades la obligación de proceder a verificaciones periódicas para cerciorarse de que las instituciones financieras cumplan la obligación de presentar informes sobre transacciones sospechosas.

En virtud del artículo 11 del mismo proyecto de ley, los inspectores de la Comisión Bancaria del Banco de Argelia, actuando mediante inspecciones in situ o la revisión de piezas documentales, deben remitir un informe confidencial a la Dirección de Información Financiera cuando ésta descubra una operación sospechosa.

En esas circunstancias, el artículo 12 del mismo proyecto dispone que se abra un procedimiento disciplinario contra el banco o institución financiera en caso de que se demuestre que no ha presentado una declaración de sospecha o no tiene un sistema de control interno para estas declaraciones.

La Comisión Bancaria se asegura de que las instituciones financieras tengan programas adecuados para detectar y prevenir casos de blanqueo y financiación del terrorismo. Se comunica a la Dirección el resultado de los procedimientos instituidos en la materia.

La reglamentación bancaria no prevé por el momento la institución y autorización de sociedades de envío de remesas en Argelia. Existen oficinas de cambio pero son muy pocas y no tienen mayor actividad. Estas oficinas están sometidas a la reglamentación bancaria y al control cambiario por parte del Banco de Argelia.

Están también sometidas regularmente a controles e inspecciones periódicos por parte del Banco de Argelia y de la Comisión Bancaria.

Las auditorías de bancos e instituciones financieras son muy frecuentes. Además de la auditoría externa encargada a los Comisarios de Cuentas, autorizados por el Consejo del Colegio de Contadores, el Banco de Argelia realiza continuamente misiones de inspección y ha instituido en 2001 un control integral de las actividades de todas las instituciones financieras. La frecuencia e intensificación de las actividades de la Inspección General del Banco de Argelia han permitido verificar y controlar 35.000 operaciones de comercio exterior en 2003.

1.6 El Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo ha sido ratificado por Argelia y, por lo tanto, es aplicable en su integridad. Se imponen a los operadores financieros y otros agentes autorizados para efectuar transacciones en Argelia los requisitos del apartado a) del párrafo 1 de la resolución 1373 (2001). En el párrafo 1.4 ya se ha hecho referencia a la cuestión de la identificación de personas, entidades y clientes bancarios.

También se impone a los contadores y otros agentes que hagan transacciones financieras la obligación de identificar a sus clientes y comunicarlos a las autoridades competentes en las mismas condiciones previstas por el artículo 108 de la Ley de Hacienda de 2003. Las operaciones de intermediación financiera o similares están sometidas a procedimientos de identificación mediante documentos oficiales y probatorios de la identidad de los verdaderos clientes, la cual es comunicada al Banco de Argelia y a otros bancos e instituciones financieras cuando se trata de operaciones ordinarias y operaciones de transferencia de fondos o de capitales dentro de los límites previstos por la ley y la reglamentación en materia de comercio exterior.

1.7 Ni en la ordenanza 96-22 de 17 de julio de 1996 ni en la ordenanza 03-11 de 26 de agosto de 2003, como tampoco en las disposiciones legislativas y reglamentarias anteriores, se menciona a los abogados y los notarios entre quienes están autorizados a efectuar por sí mismos o por cuenta de sus clientes operaciones bancarias, financieras o de comercio exterior. Por lo demás, en ninguna disposición legislativa se prevé una función especial para los contadores u otros agentes en lo que respecta a las transacciones financieras.

La actividad de las asociaciones de beneficencia está reglamentada en la ordenanza 77.03 de 19 de febrero de 1977. Las colectas de fondos por esas asociaciones están rigurosamente controladas. Cuando la colecta tiene lugar en los límites del territorio de una *wilaya*, las autoridades locales son competentes para autorizarla o no. Si se extiende a dos o más *wilaya*, los Ministros del Interior y de Asuntos Religiosos dictan un decreto conjunto que fija las modalidades prácticas. Las autoridades administrativas competentes en el ámbito territorial son las únicas facultadas para autorizar, en condiciones especiales, la colecta de fondos por parte de una asociación autorizada de utilidad pública que haya hecho anteriormente una solicitud escrita para justificar el objeto de su solicitud y el propósito de los fondos, al mismo tiempo que la identidad de sus miembros encargados de la colecta y distribución de los fondos. Las infracciones que se constaten, como la desviación de fondos o su utilización para fines subversivos, están sujetas a la ley penal y son sancionadas como actividades delictivas o terroristas. Además de las penas impuestas a quienes estén involucrados en una desviación de fondos, la asociación queda disuelta por infracción de las obligaciones que rigen el funcionamiento de las entidades sin fines de lucro.

La autorización es válida para un solo día y no se pueden hacer colectas domiciliarias. Quien haya concedido la autorización puede ordenar que se verifique la gestión de las donaciones recibidas. Los servicios de policía están asimismo facultados

para iniciar, llegado el caso, una investigación sobre la gestión o el destino de los fondos recibidos.

Según el artículo 372 del Código Penal, “Quien cometa o trate de cometer una estafa utilizando nombres o atributos falsos o recurriendo a maniobras fraudulentas para hacerse enviar u obtener o tratar de hacerse enviar u obtener fondos, bienes muebles u obligaciones, promesas o recibos, para apropiarse de la fortuna de otro o de parte de ella será sancionado con una pena de presidio no inferior a un año y no superior a cinco años y con una multa de 500 a 20.000 dinares”.

Si el delito es cometido por una persona que haya hecho una oferta al público en relación con la emisión de acciones, obligaciones, bonos o valores de cualquier índole, se trate de una sociedad o de una empresa comercial o industrial, la pena de presidio podrá llegar a 10 años y la multa a 200.000 dinares.

Cuando se trate de delitos calificados de actos de terrorismo, el artículo 47.3 del Código de Enjuiciamiento Penal da facultades al juez de instrucción para proceder o hacer que la policía proceda a confiscaciones o decomisos, tanto de día como de noche y en cualquier lugar del territorio nacional. Asimismo, puede decretar de oficio cualquier medida precautoria.

1.8 Western Union es el único organismo especializado en transferencias de fondos que funciona en Argelia. Las transferencias hacia Argelia tienen lugar por conducto de bancos e instituciones financieras autorizadas, entre ellas Algérie Poste, organismo público encargado del servicio postal. Western Union ha firmado con sus asociados en Argelia un acuerdo especial. Los fondos transferidos se pueden retirar previa presentación de documentos de identidad.

Las transferencias informales de fondos tienen lugar al margen de los circuitos oficiales y los procedimientos reglamentarios. Las condiciones para las transferencias se rigen por la ordenanza 96-22 de 1996 y la ley 03.01 de 19 de febrero de 2003, relativas a las operaciones cambiarias y a los movimientos de capitales desde y hacia el exterior.

Los mecanismos establecidos para prevenir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo se han descrito más arriba y están instituidos a nivel de bancos e instituciones financieras. Es difícil controlar los movimientos informales. Este aspecto guarda relación con actividades delictivas que son de la competencia de la policía y la gendarmería nacionales.

Estos dos órganos de seguridad, cuyos agentes son oficiales de la policía judicial, participan bajo la autoridad del Procurador de la República competente en el ámbito territorial en la represión del bandidaje, la delincuencia organizada, la lucha contra el terrorismo y otras actividades subversivas, la falsificación y la utilización fraudulenta de fondos y activos financieros para cualquier fin.

Cabe destacar que en Argelia no se utilizan las transferencias del tipo de la “hawala” que se encuentran en algunos países. Los movimientos de capitales siguen constituyendo una operación sometida a la legislación y reglamentación cambiarias vigentes.

Las investigaciones y constataciones realizadas, así como las instrucciones judiciales, pueden culminar en procesos penales y en la sanción por los tribunales de quienes sean declarados culpables de actividades delictivas.

1.9 La lucha contra el blanqueo de capitales y la represión de la financiación del terrorismo encuentra su vertiente jurídica en la formulación de una ley para prevenir y reprimir estas actividades ilícitas, que será aprobada y puesta en vigor a la brevedad. Los artículos 19, 20 y 21 del proyecto de ley establecen la obligación de cooperar con la Dirección.

1.10 Además de las disposiciones del artículo 19 citadas en el párrafo 1.12, los artículos 20 y 21 amplían la obligación de comunicar sus sospechas a las profesiones liberales reglamentadas, en particular los abogados, notarios, peritos tasadores, peritos contables, comisarios de cuentas, corredores, agentes de aduana, cambistas, intermediarios en operaciones de bolsa, agentes inmobiliarios y comerciantes de piedras preciosas, antigüedades y obras de arte.

1.11 La recopilación, la difusión y el aprovechamiento conjunto de la información son fundamentales para que las investigaciones e indagaciones destinadas a prevenir y combatir el blanqueo de fondos y la financiación del terrorismo culminen con éxito. Desde ese punto de vista, la Dirección y el Banco de Argelia tratan de establecer las condiciones de transparencia y eficacia necesarias para llevar a buen término la lucha contra la utilización de la red bancaria para fines delictivos y terroristas.

La capacitación continua de los agentes del Estado es indispensable para el buen funcionamiento de la administración pública. Se asigna especial importancia al perfeccionamiento del personal de bancos, servicios de seguridad, gendarmería y aduanas, así como a la modernización del equipo y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Se han introducido reformas con miras a un funcionamiento óptimo de los medios disponibles. Se organizan periódicamente cursos de formación, reciclaje y perfeccionamiento para los funcionarios de la policía judicial respecto de los delitos financieros vinculados con la delincuencia organizada y el terrorismo.

Los cursos y seminarios están a cargo de profesores universitarios y de especialistas en derecho, criminología e investigación financiera. Se ofrecen igualmente breves ciclos de capacitación en el contexto de la cooperación con algunos países y organismos internacionales. La Unión Europea ha propuesto recientemente un curso de capacitación en el marco de un programa de apoyo a la modernización de la policía.

Las actividades en el plano jurídico encaminadas a la represión del blanqueo de dinero y de la financiación del terrorismo hacen necesario impartir formación práctica y técnica a los encargados de la cuestión, que pasan a formar parte de equipos asignados a los distintos servicios de seguridad. Estos servicios tienen una obligación de resultado en el marco de una misión más amplia de prohibir y combatir el terrorismo y la delincuencia organizada.

1.12 La legislación de Argelia y todas las disposiciones legales relativas a la lucha contra el terrorismo tipifican la actividad terrorista en todos sus aspectos. En efecto, desde la aprobación de la Ley 95-11, de 25 de febrero de 1995, y de las medidas ulteriores, el objetivo consiste en tipificar todo acto que guarde relación directa o indirecta con una actividad terrorista. El proyecto de enmienda del código penal hace del terrorismo un crimen imprescriptible que hay que calificar de tal en todas las circunstancias.

En el contexto de la financiación del terrorismo, según la legislación argelina no es necesario que los fondos sean efectivamente utilizados para que la actividad

sea calificada de delictiva. La organización material de su recaudación y la intención de utilizarlos para fines delictivos y terroristas bastan para que las personas involucradas sean declaradas culpables de actividades de terrorismo en Argelia o en el extranjero. Así ocurre incluso en el caso de no haberse realizado acto o tentativa alguna ni una transferencia de fondos de un país a otro o en aquel en que el origen de los fondos utilizados es lícito pero el objetivo no lo es. Como elemento determinante de la pertenencia a un grupo terrorista o la intención de cometer un acto terrorista, la legislación argelina recurre a la vez a las pruebas, a la intención y a la cadena de responsabilidad.

El delito se refiere a todos los elementos constitutivos del acto terrorista y las penas impuestas son las previstas para el acto terrorista.

El artículo 2 del proyecto de ley antes mencionado tipifica la financiación del terrorismo en los términos siguientes: “Comete el delito de financiación del terrorismo quien por cualquier medio, directa o indirectamente y deliberadamente o no, proporciona o reúne fondos con la intención de utilizarlos en todo o parte para cometer crímenes y delitos calificados de actos terroristas o subversivos”.

El proyecto de ley tipifica la reunión de fondos para financiar un acto de terrorismo cometido en territorio nacional o en el extranjero a condición de que los hechos imputados estén tipificados en el país en que se hayan cometido.

1.13 La congelación se aplica a los fondos y activos que sirven para financiar el terrorismo o son producto del terrorismo o del blanqueo de fondos. Los individuos declarados culpables de financiación del terrorismo son condenados por pertenencia a una organización terrorista y por financiación de una actividad terrorista. Una vez demostrados los hechos, se procede a la confiscación del objeto del delito, es decir, de los fondos y activos. Se trata en efecto de una responsabilidad penal única del autor o los autores declarados culpables de tales actos delictivos.

Las personas que actúan por cuenta de grupos terroristas o delictivos reciben el mismo trato tanto si han sido autores de actos terroristas como si han sido declarados culpables de complicidad en la financiación de una actividad terrorista. La sentencia del tribunal se referirá tanto a la condena penal como a la congelación de los bienes.

La ley sobre el blanqueo de fondos tiene por objeto reforzar los procedimientos cautelares en materia de incautación y congelación de activos y confiere a la Dirección la discrecionalidad de ordenar, como medida cautelar y durante 72 horas, la postergación de la ejecución de toda operación bancaria y la congelación de los activos en la cuenta de toda persona física o moral sobre la que recaiga una sospecha fundada de blanqueo de dinero o financiación del terrorismo.

Por lo demás, el Presidente puede, a petición de la Dirección y de conformidad con el artículo 18 del proyecto de ley, prorrogar el plazo de 72 horas u ordenar la confiscación de los fondos, cuentas o títulos. La orden dictada en respuesta a la petición es de ejecución inmediata.

El artículo 19 obliga a “toda persona física o moral que en el ejercicio de su profesión realice o aconseje operaciones que entrañen depósitos, intercambios, inversiones, conversiones o cualesquiera otros movimientos de capitales, a notificar a la Dirección toda operación que se efectúe con fondos que parezcan provenir de un delito o que estén destinados a financiar el terrorismo”. Esta obligación incumbe

asimismo, a tenor del artículo 20, a las instituciones financieras conexas, las compañías de seguros, las oficinas de cambio, las mutualidades, las casas de apuestas, los juegos y los casinos.

Los fondos que se congelan son los pertenecientes a individuos que intervienen en la financiación del terrorismo, sin distinción alguna. La ley argelina se atiene a la materialidad de los hechos y las penas impuestas son las previstas en el Código Penal por actos de terrorismo.

1.14 La ley es la base jurídica para calificar los actos de terrorismo. En la ley 95.11 figuran la definición de terrorismo y las disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal mencionadas en el presente informe y en los informes anteriores presentados al Comité contra el Terrorismo y al Comité de Sanciones.

En lo que se refiere a las organizaciones terroristas que operan en Argelia, es preciso añadir la Djaz'ara al GIA, el GSPC y la DHDS ya incluidos en la lista del Comité de Sanciones.

La Djaz'ara es una organización terrorista integrada por argelinos que combatieron en el Afganistán y luego ingresaron en el Frente Islámico de Salvación, ya disuelto. La Djaz'ara es uno de los brazos armados del disuelto FIS. Sus dirigentes, que operan desde el extranjero bajo el nombre de "Oficina Ejecutiva Nacional" o "Instancia Ejecutiva del ex FIS", han incitado públicamente al asesinato de políticos, intelectuales, periodistas y funcionarios del Estado y a la destrucción de bienes públicos y privados. Han rechazado la ley sobre el restablecimiento de la concordia civil que tenía como objetivo la instauración de un marco jurídico para el regreso y la reinserción social de los terroristas mediante su puesta en libertad o la reducción de sus penas.

Esta organización tiene contactos en el extranjero y sus miembros están involucrados en el tráfico de armas y municiones y en la recaudación de fondos para financiar actividades terroristas en Argelia. Los vínculos de esta organización con Al-Qaida están comprobados y varios de sus dirigentes formaban parte del movimiento de los talibanes o estaban muy próximos a él.

Las personas siguientes, seis ciudadanos de Malí y uno de Mauritania, toman parte activamente en las actividades terroristas llevadas a cabo por el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) en los países del Sahel y en otros lugares. En particular suministraron las armas que los terroristas del GSPC debían introducir de manera fraudulenta en Argelia en enero de 2004. Dichas armas fueron interceptadas el 23 de enero de 2004 por el ejército argelino en la región de Ain Salah, en territorio nacional.

El Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dispone ya de esta lista:

- Teniente Coronel Mohamed Abderrahman Ould Meiddou, oficial de las fuerzas armadas de Malí;
- Comandante Seidou Safari, oficial de las fuerzas armadas de Malí;
- Ben Salah Osmane, militar de Malí;
- Baba Ould Chouikh, ciudadano de Malí, comerciante en la localidad de Gao (Malí);

- Mohamed Ould Laouinet, ciudadano de Malí, y su hermano;
- Mustapha Ould Laouinet, residentes ambos en Gao (Malí);
- Abdelfettah Ouled Marakchi, de nacionalidad mauritana, comerciante residente en Nuakchott, nacido en 1954 en Akloujt, hijo de Merakchi Ould Ghade y de Mounira bint Taleb.

Hasta la fecha, los bancos y establecimientos financieros no han descubierto fondos destinados a la financiación del terrorismo ni recibido información sobre operaciones de este tipo, ni siquiera de sus socios extranjeros. Así pues, no se ha procedido a la congelación o confiscación del objeto del delito.

1.15 En lo que respecta a la definición de grupo u organización terrorista, el decreto ley 92.03, de 30 de septiembre de 1992, modificado y completado por el decreto ley 93.05, de 9 de abril de 1993, así como por el artículo 87 bis de la ordenanza 95.11, de 25 de febrero de 1995, del Código Penal, califica de terrorista “toda infracción que atente contra la seguridad del Estado, la integridad del territorio nacional, la estabilidad y el normal funcionamiento de las instituciones mediante actividades que tengan por objeto:

- Sembrar el terror entre la población y crear un clima de inseguridad atentando moral y físicamente contra las personas o poniendo en peligro su vida, su libertad o sus bienes;
- Obstaculizar la libertad de circulación y movimiento en la vía pública y ocupar los espacios públicos con grupos de personas;
- Atentar contra los símbolos de la nación y de la República y profanar sepulturas;
- Atentar contra el medio ambiente, y los medios de comunicación y de transporte;
- Obstaculizar el funcionamiento de las instituciones públicas y la acción de las autoridades públicas, así como el libre ejercicio del culto y de las libertades públicas;
- Obstaculizar el funcionamiento de las instituciones públicas o atentar contra la vida y los bienes de sus miembros, u obstaculizar la aplicación de las leyes y reglamentos.

En el párrafo 3 del artículo 87 bis del Código Penal se califican también como actos terroristas las actividades siguientes:

- La creación de asociaciones, cuerpos, grupos u organizaciones cuyos objetivos sean llevar a cabo actividades subversivas o terroristas;
- La adhesión o la participación, en la forma que sea, en las actividades de esas organizaciones;
- La apología del terrorismo, el fomento y la financiación de actividades terroristas;
- La reproducción y difusión de documentos, grabaciones o impresos que hagan apología del terrorismo.

Argelia se atiene a la definición de terrorismo que figura en las convenciones de la OUA y de la Liga de los Estados Árabes que ha ratificado. Se califica a una

organización de terrorista según esas bases jurídicas y de acuerdo con las investigaciones de los servicios de seguridad y las autoridades judiciales.

Las solicitudes de asistencia judicial procedentes de gobiernos extranjeros se tramitan de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal argelino y los instrumentos bilaterales y multilaterales vigentes. En los casos en que las informaciones y datos solicitados se inscriban en el marco de la cooperación entre los servicios de policía judicial encargados de la represión de la financiación del terrorismo y de la gran delincuencia transnacional organizada, los servicios competentes cooperan directamente o por mediación de la Interpol a fin de seguir el procedimiento por la vía judicial.

Las solicitudes relativas a actos y actividades terroristas son tramitadas con rapidez en todos los casos. En aplicación de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, Argelia ha firmado convenios de asistencia judicial recíproca y desea poder llevar a buen término las propuestas en este sentido que está estudiando con algunos países.

1.16 Argelia ha propuesto una serie de medidas a sus interlocutores a fin de ampliar las bases de una cooperación fructífera en los ámbitos político, diplomático y operacional. Se han presentado proyectos de acuerdo de cooperación a varios países.

1.17 El Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad ha de intervenir activamente en el fomento de los acuerdos de cooperación entre Estados. Debe invitar a los países a que respondan a las solicitudes que presenten otros países a este respecto.

1.18 Está en marcha el procedimiento de ratificación del Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental. Los instrumentos internacionales relativos al terrorismo se aplican sistemáticamente en el plano nacional de conformidad con la Constitución de Argelia que considera que todo convenio internacional ratificado tiene precedencia sobre las leyes nacionales.

Mecanismo de represión del terrorismo

1.19 Los tribunales argelinos son competentes para ocuparse de actividades terroristas en que estén implicados nacionales del país, aunque los actos incriminados no vayan dirigidos contra Argelia ni contra sus intereses en el extranjero. En lo que respecta a situaciones en que un ciudadano extranjero residente en Argelia está acusado de haber cometido un acto de terrorismo en el extranjero, los tribunales argelinos son igualmente competentes si se dan las condiciones jurídicas necesarias para una acción penal. La sentencia se dictará con arreglo a las disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal relativas a las actividades terroristas. Las penas impuestas son las previstas por la ley.

El principio de derecho “procesar o extraditar” está incorporado al derecho argelino. En el artículo 588 del Código de Procedimiento Penal se considera competentes a los tribunales argelinos para perseguir y procesar a cualquier ciudadano extranjero que haya cometido un crimen o delito contra la seguridad del Estado. El artículo 582 prevé que los ciudadanos argelinos que hayan cometido algún acto tipificado como delito fuera del territorio nacional pueden ser perseguidos y procesados en Argelia. El artículo 583 prevé acciones penales cuando un argelino cometa un delito en el extranjero.

Las solicitudes de extradición de extranjeros que residen legalmente en Argelia se rigen por el artículo 694 y artículos siguientes del Código de Procedimiento Penal y por los convenios bilaterales o multilaterales ratificados por el Gobierno de Argelia. Por lo demás, cabe precisar que la situación de los extranjeros en Argelia y las condiciones de entrada y residencia en el país se rigen por la ley 66.211, de 21 de julio de 1996. En el artículo 20 y artículos siguientes se estipulan las condiciones para la expulsión y las sanciones aplicables en caso de infracción comprobada o de actividad reprensible.

La importancia atribuida a la cuestión de la extradición, a la asistencia y a la cooperación judicial ha llevado a las autoridades argelinas a proponer a otros países con los que colabora la adopción de instrumentos jurídicos al respecto. Se han firmado y ratificado acuerdos; algunos todavía deben ultimarse y otros concretarse.

1.20 Argelia sigue oponiéndose firmemente a la concesión del asilo político a terroristas y a delincuentes buscados por la policía. El derecho de asilo queda desvirtuado cuando beneficia a delincuentes con el falso pretexto de que sufren persecución en su país de origen, donde directa o indirectamente han contribuido a sembrar la muerte y la desolación entre la población civil.

Las leyes de determinados países relativas al derecho de asilo siguen siendo aprovechadas por organizaciones terroristas y personas directamente implicadas en actos terroristas en sus países de origen, o que hacen apología del terrorismo, predicán el odio y la intolerancia e incitan públicamente al asesinato. A causa de esta interpretación errónea del derecho de asilo, Argelia ha expresado reservas y a veces dudas acerca de la voluntad de cooperación de algunos países.

Las disposiciones jurídicas de Argelia están en consonancia con el compromiso del país de combatir el terrorismo y son conformes a los instrumentos internacionales ratificados, como los convenios de la OUA y de la Liga de los Estados Árabes.

1.21 En el cuadro siguiente figuran las estadísticas disponibles sobre las personas que han comparecido ante la justicia por pertenencia a una organización terrorista:

Año	Número de personas procesadas por actos terroristas	Número de asuntos relacionados con el terrorismo			Total
		Creación y pertenencia a grupo terrorista armado	Fomento y apología del terrorismo	Otros atentados contra la seguridad del Estado	
1997	17 678	2 100	949	788	3 837
1998	15 191	1 628	720	390	2 738
1999	12 927	1 033	297	168	1 498
2000	8 538	837	363	294	1 494
2001	3 650	549	160	469	1 178
2002	3 267	845	278	333	1 456
2003	3 398	537	104	208	849
Total	64 649	7 529	2 871	2 650	13 050

Controles de aduanas, fronteras e inmigración

1.22 El control de las fronteras es fundamental para la seguridad nacional y a ella contribuyen las aduanas. El control de la circulación transfronteriza de dinero en efectivo, instrumentos negociables, piedras y metales preciosos forma parte de las funciones tradicionales de las aduanas. Como el tráfico ilícito de ese tipo de mercancías es muy frecuente, se requieren recursos adecuados, un trabajo minucioso y una gran experiencia para combatir esas prácticas ilícitas. La Administración de Aduanas está dotada de escaners y equipo de detección de nivel internacional que le permiten desempeñar sus funciones con eficacia. Mediante la formación de aduaneros en técnicas de control y vigilancia, este cuerpo ha podido familiarizarse con los métodos de los traficantes y los contrabandistas y contrarrestarlos.

La cantidad de metales preciosos que pueden transportar las personas que entran o salen del territorio nacional se limita a 100 gramos de oro, plata o platino. Si se trata de cantidades mayores, es preciso presentar una declaración de aduanas, acompañada de los formularios habituales y las autorizaciones necesarias, como la domiciliación bancaria.

Si no se presentan documentos que describan el carácter de la transacción, se procede a decomisar la mercancía sin perjuicio de ulteriores acciones judiciales.

La importación de divisas no está sujeta a ninguna limitación, salvo la necesidad de presentar una declaración de aduanas mediante un formulario específico que debe rellenar el importador. La exportación de divisas por parte de personas que van al extranjero por motivos privados esta autorizada si se efectúa a través de un banco y hasta un total equivalente a 8.000 euros. Por su parte, las empresas están sujetas a otro régimen que las obliga a servirse de sus bancos para realizar actividades comerciales.

1.23 Los procedimientos jurídicos y administrativos adoptados por Argelia para proteger de un ataque terrorista sus instalaciones portuarias, buques y el personal correspondiente se aplican en el marco del dispositivo de seguridad interna de dichos establecimientos.

En el decreto 84.385, de 22 de diciembre de 1984, se indican las medidas destinadas a proteger las instalaciones, construcciones y recursos de puertos y aeropuertos. El decreto ejecutivo 94.340, de 25 de octubre de 1994, es el texto por el que se crearon el Comité Nacional de Seguridad Portuaria y el Comité de Seguridad de los Puertos Civiles y Comerciales. Este Comité es el órgano facultado a nivel nacional para garantizar la vigilancia y la seguridad de las instalaciones portuarias. Se encarga de aplicar las medidas aprobadas y las recomendaciones formuladas, incluidas las previstas en los instrumentos internacionales pertinentes ratificados por Argelia.

Se han adoptado otras medidas legislativas y reglamentarias de acuerdo con la evaluación de la situación en materia de seguridad y la evolución del volumen de tráfico de mercaderías y personas. De esta manera, por el decreto ejecutivo 95.192, de 10 de julio de 1995, se creó la Comisaría de Seguridad de Puertos y Aeropuertos.

Este texto reglamentario se completó mediante la ordenanza 95.24, de 25 de septiembre de 1995, relativa a la protección del patrimonio público y la seguridad de las personas que de él se ocupan. Se promulgó un decreto para aplicar las disposiciones de la mencionada ordenanza, decreto que prevé las modalidades prácticas de la seguridad interna de los establecimientos y recintos portuarios y aeroportuarios.

Por último, mediante el decreto 98.410, de 7 de diciembre de 1998, se establecen oficinas ministeriales encargadas de la seguridad interna de los establecimientos y se definen sus atribuciones relativas a la seguridad de los bienes y las personas que allí se encuentran.

Para prevenir y desbaratar toda tentativa interna o externa de robo, destrucción, deterioro o agresión contra las instalaciones, construcciones o mercancías y el personal correspondiente, se aplican normas de seguridad estrictas. Las instalaciones y locales situados en el interior de los recintos se clasifican en diversas categorías según su importancia. Se delimita y traza un perímetro de seguridad y se adoptan las medidas de protección oportunas.

La seguridad interna y externa de las dependencias corre a cargo de personal cualificado. Según la ordenanza 95.24, los administradores de las dependencias disponen de medios activos y pasivos para velar por su seguridad, de la que son penalmente responsables.

Una Comisión Nacional de Clasificación de Puntos Sensibles, creada bajo los auspicios del Ministerio de Defensa Nacional, se encarga de determinar las medidas que deben adoptarse para garantizar su seguridad.

Además, Argelia es parte en los convenios internacionales en la materia y aplica las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional relativas a la lucha contra el terrorismo en el sector marítimo.

Por último, en lo que respecta a la seguridad de la infraestructura del transporte, la aplicación del Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias (ISPS), que se encuentra en una fase avanzada, se extenderá progresivamente a todos los puertos del país.

Controles para impedir el acceso de los terroristas al suministro de armas

1.24 La fabricación, importación, exportación y utilización de armas de fuego se rigen por las disposiciones de la ordenanza 97.06, de 21 de enero de 1997. En ese texto legislativo se enumeran de manera clara las condiciones para la tenencia de diferentes categorías de armas por personas físicas y morales y se prevén penas de reclusión por toda tenencia ilegal de armas de fuego.

Según lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 87 bis del Código Penal, “quien tenga, sustraiga, porte, comercialice, importe, exporte, fabrique, repare o utilice sin permiso de la autoridad competente armas o municiones será castigado con pena de reclusión de 10 a 20 años de cárcel y multa de 500.000 a 1 millón de dinares.

Por otra parte, la ordenanza 97.06, de 21 de enero de 1997, confiere al Estado el monopolio de la adquisición, fabricación e importación de armas de guerra clasificadas en diversas categorías.

En el decreto ejecutivo 98.96, de 18 de marzo de 1998, se estipulan las condiciones para conceder licencia de armas a personas físicas o morales, quedando excluidas las que tengan antecedentes penales o hayan cometido algún delito. La licencia puede revocarse si se demuestra que el titular ya no cumple las condiciones exigidas o bien ha cometido alguna infracción.

Las actividades de corretaje de armas, el registro de los corredores y la concesión de licencias y autorizaciones para ejercer ese comercio, la identificación de los titulares y la mención de sus nombres en la documentación de las transacciones están reglamentados.

Asimismo, el artículo 22 del decreto 98.96 obliga a los titulares de las licencias a llevar un registro especial que los servicios del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior pueden consultar en todo momento. También se requiere un inventario y toda importación o exportación de material de guerra está sujeta a un control previo.

El intercambio de información con los países extranjeros a fin de prevenir las expediciones ilegales de armas de fuego y otros componentes de armas tiene lugar en el marco de la cooperación bilateral y multilateral entre diferentes servicios administrativos y fuerzas de seguridad. Los servicios de aduanas en puertos y aeropuertos desempeñan una función crucial de vigilancia y control, y también se guían por la información que reciben de sus homólogos de puertos y aeropuertos extranjeros. La colaboración entre los diversos servicios de seguridad presentes en los recintos portuarios y aeroportuarios permite adoptar mejores medidas y actuar con mayor rapidez en el control de las mercaderías con destino a Argelia o en tránsito.

2. Asistencia y consejos

2.1 Argelia desea mantener relaciones de trabajo y de cooperación con el Comité. Su participación en la labor del Consejo de Seguridad le permitirá reforzar esas relaciones y contribuir a la revitalización del Comité.

2.2. Argelia y otros países estudian la posible aplicación de programas de cooperación y analizan cuáles son las necesidades concretas de la lucha antiterrorista. Actualmente, las principales necesidades son las siguientes:

- La formación de 60 mandos y agentes de policía en sistemas de investigación, métodos, técnicas y aprovechamiento de la información para detectar y seguir los diversos circuitos financieros ocultos, así como los fondos y bienes de origen dudoso;
- La organización en Argelia de seminarios y talleres especializados en la lucha contra el blanqueo de fondos y la financiación del terrorismo, y la participación de directivos bancarios y financieros en dichos seminarios y talleres;
- La tipología relativa a la organización de un módulo de formación especializada para los dirigentes y mandos de la policía, las aduanas, la justicia, la banca y la Dirección de Información Financiera en lo referente a técnicas de investigación del blanqueo de fondos y la financiación del terrorismo.

Por lo demás, Argelia ha iniciado consultas con algunos países para determinar posibles ámbitos de cooperación. Asimismo, sigue dispuesta a aportar su contribución y a trabajar con otros países en los planos político, diplomático y operacional para poner fin a las actividades criminales de los grupos terroristas de todo el mundo.

2.3 En sus informes nacionales precedentes Argelia mencionó ya los países con los que ha firmado acuerdos bilaterales. Mantendrá informado al Comité contra el Terrorismo de los nuevos acuerdos que concluya.

Conclusión

El Gobierno de Argelia espera haber respondido así a la petición de aclaraciones y comunicado detalles útiles sobre las nuevas medidas adoptadas desde la presentación de su informe nacional anterior.

Enfrentada directamente al terrorismo internacional, Argelia se dotó desde un principio de un arsenal de leyes para librar la lucha contra ese flagelo. Luego no ha dejado de perfeccionar esos mecanismos sobre la base de la propia experiencia y de conformidad con las normas internacionales vigentes.

La ley argelina criminaliza ahora la acción terrorista en su conjunto. Las penas impuestas son severas y los jueces argelinos califican de terrorista toda acción que contribuya directa o indirectamente a la realización del acto incriminado. La tipificación jurídica se extiende ahora al blanqueo de dinero así como al proyecto terrorista y a sus vínculos con la delincuencia organizada.

La ley para prevenir y combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y las enmiendas correspondientes que se introducirán en el Código Penal completarán las medidas legislativas encaminadas a establecer sistemas de control y vigilancia de las operaciones bancarias sospechosas y procedimientos de prevención y represión.

La Dirección de Información Financiera tendrá un papel esencial que desempeñar a este respecto. Los contactos internacionales ya establecidos reflejan la voluntad de darle un dinamismo real y las autoridades están decididas a facilitarle todos los medios materiales e institucionales necesarios para el cumplimiento de su misión.

La rápida modernización de los servicios de aduanas y de policía obedece asimismo al deseo de adaptarse a las normas internacionales.

Sin embargo, Argelia sabe que sus iniciativas requieren un sólido respaldo internacional.

Es imperativo que la cooperación internacional se intensifique y dé resultados más concretos sobre el terreno, sobre todo en el ámbito judicial. El Comité debe prestar mayor atención a los obstáculos jurídicos y políticos que persisten a este respecto: la comunidad internacional puede y debe hacer mucho más para afrontar los desafíos del terrorismo internacional.

En esta perspectiva, Argelia tiene muchas esperanzas depositadas en el proceso de revitalización del Comité contra el Terrorismo, que ha promovido en todo momento. Espera, en particular, una mayor activación de un aspecto fundamental de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad: la obligación que tienen todos los países de cooperar plenamente y de buena fe en todos los ámbitos de la lucha contra el terrorismo.

La lucha internacional contra el terrorismo transnacional constituye un proyecto complejo de largo alcance cuyo éxito dependerá de un compromiso político claro y constante de toda la comunidad de naciones.